

El Salvador proceso

informativo semanal

año 8
número 313

25
noviembre
1987

centro universitario de documentación e información

- El regreso de Ungo y Zamora
- El FDR, a la palestra política
- Más acciones guerrilleras
- Agudización del desempleo
- Oscuro panorama agrícola
- Propuesta sandinista para los contras
- Pronunciamiento de la Convergencia Democrática (1)

El regreso de Ungo y Zamora

El regreso de Ungo y Zamora a El Salvador sin arreglos previos con el gobierno y con ánimo de entrar de lleno y desde dentro en el proceso político del país, es el resultado más importante y trascendente de Esquipulas dos por lo que toca a El Salvador. Puede serlo, al menos, si es que se respeta su estancia y su futuro trabajo político. Cuando todas las demás medidas han resultado inefectivas (Comisión de Reconciliación, diálogo con el FMLN-FDR, cese del fuego) o poco efectivas como el caso de la amnistía, este efecto indirecto de E 2 puede constituirse en algo nuevo, algo que todavía es pequeño, pero que puede abrir una nueva fase en el proceso salvadoreño.

La novedad del hecho estriba en que el FDR pretende hacerse presente en el país, a través de la Convergencia Democrática que aglutina de algún modo al MNR, al MPSC y al PSD. Es un arma de doble filo. La embajada norteamericana y el gobierno lo desean, porque ven en ella la mejor prueba de la democracia pregonada en el país y porque piensan que es un comienzo de deslegitimación del FMLN. El FDR, a pesar de ser consciente de esto, considera que ha llegado la hora de ser efectivo y de luchar desde dentro en favor de varios objetivos: ante todo, presionar en favor de una solución negociada que paulatinamente traiga el debilitamiento y final de la guerra; en segundo lugar, para ampliar los espacios de la lucha política ampliando por la izquierda el espectro de partidos políticos, que hoy sólo alcanza hasta el centro derecha; en tercer lugar, medir qué posibilidades hay de alcanzar el poder por vías no violentas. Los tres objetivos son excelentes, son nuevos relativamente y pueden dinamizar un proceso, que se agita y se mueve mucho, pero que avanza poco.

Era interesante ver qué posición tomaría el FMLN ante esta decisión. La respuesta ha sido del todo positiva. No sólo no ha sido rota la alianza por ninguno de los dos frentes, sino que el FMLN ha saludado la decisión e incluso ha decretado un cese del fuego unilateral como gesto de aprobación y de buena voluntad. El FMLN corre riesgos con esta decisión. Si el FDR triunfa políticamente, la acción predominantemente militar del FMLN irá quedando paulatinamente desautorizada. Pero, por otro lado, el FMLN necesita probar qué espacios políticos se dan en El Salvador. Si ni siquiera se dan espacios para el

socialismo moderado del MNR, PSD y MPSC, mucho menos se dará para la opción socialista-revolucionaria. En este caso el recurso a las armas no podrá desautorizarse y deslegitimarse tan fácilmente. De todos modos el FMLN necesita de un trabajo político, que vaya más allá del trabajo sindical-popular, para hacer ver a la población desde dentro que la propuesta fundamental de un gobierno de amplia participación no traerá males al país sino, al contrario, traerá el bien del cese de todo tipo de violencia y el bien de poder trabajar rápida y unidamente en la reconstrucción nacional.

La actitud del gobierno ante el regreso de Ungo y Zamora ha sido verbalmente intolerable, aunque en la realidad de los hechos no ha sido tan mal. Ha habido amenazas veladas de que puedan ser inculcados, no ha habido flexibilidad para comprender lo que significa la no ruptura oficial de la alianza. Y, lo que es peor, tanto Duarte como Guevara Lacayo han hecho declaraciones del todo irresponsables. El presidente de la Asamblea ha dicho, contra toda verdad, que el FMLN es el brazo armado del FDR y el presidente de la República ha dicho que los miembros del FDR corren peligro de ser asesinados por el FMLN, dando así ambos una segura pista de acción a los escuadrones de la muerte, que han sido y son de la derecha salvadoreña con claros entronques con esa parte del ejecutivo que son los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada. Las nuevas inculpaciones en el caso de Mons. Romero lo vienen a demostrar una vez más.

En cambio, las actuaciones y declaraciones de Ungo y Zamora en los pocos días que llevan en San Salvador han estado llenas de mesura y de sabiduría política. Han sido firmes y claras, pero al mismo tiempo han sido muy matizadas. Con profundidad han analizado la situación del país y han demostrado su complejidad sin los simplismos del gobierno y sin las exageraciones de la extrema derecha. Sus largas declaraciones en la televisión han podido iluminar a muchos sectores sociales que, hasta ahora, sólo escuchaban versiones distorsionadas de lo que son y de lo que significan el FDR por un lado y el FMLN por otro. Se puede ir superando así el extremismo del blanco y del negro, al que se tiene acostumbrado a la opinión pública. Ya esto supone un gran avance.

Tanto es el avance que los escuadrones de la muerte han empezado a contraatacar y amenazar, por lo pronto en la persona de Reni Roldán, el secretario general del PSD, precisamente por su alianza con Ungo y Zamora. Quieren impedir con ello la instalación definitiva de estos en el país, porque no aceptan las condiciones de una democracia real.

El FDR, a la palestra política

PROPUESTA; Tras arribar al país el 23.11, el presidente del FDR, Dr. Guillermo Ungo, anunció que presentaría al presidente Duarte, a través de Mons. Rivera, una nueva propuesta del FMLN-FDR para una reunión simultánea, el 5 de diciembre, de las comisiones de cese de fuego y otros temas de Esquipulas II, como un mecanismo para implementar la reanudación del diálogo entre el gobierno y los Frentes. En conferencia de prensa, Ungo señaló que el gobierno de Duarte sólo ha dado "signos aparentes" de querer la paz, pero en la práctica desea la profundización del conflicto. Ante ello —indicó— "ofrecemos públicamente, tanto el FDR como el FMLN, la reanudación del diálogo el 5 de diciembre, en México". El Dr. Ungo, quien llegó acompañado del Dr. Héctor Oqueli y del Ing. Hugo Navarrete, así como de medio centenar de personalidades políticas internacionales, indicó también que su retorno al país constituía "una visita exploratoria, no venimos con un programa maximalista, no creemos que en 6 días vamos a cambiar la sociedad y el día 7 vamos a descansar. Lo que hay que hacer es abrir espacios, porque aquí los espacios se han abierto por la lucha del pueblo y no por concesiones del gobierno. Es un primer paso en la búsqueda de un gobierno popular que rescate la soberanía e independencia ahora vendidas al imperio".

El retorno al país de los dirigentes del FDR, Rubén Zamora y Guillermo Ungo, el 21 y 23.11, respectivamente, constituye un acontecimiento que podría marcar un punto de inflexión en el curso del proceso político salvadoreño si el gobierno garantiza las condiciones mínimas necesarias para que el FDR desarrolle su trabajo político al interior del país.

Aunque el retorno de los dirigentes del FDR había sido anunciado varias semanas atrás, pareció por un momento, tras el asesinato de Herbert Anaya, que tal propósito sería pospuesto, tomando en cuenta los riesgos que aquéllos podían correr ante la relativa impunidad con que los escuadrones de la muerte reaccionan cada vez que se lo proponen. Los propios dirigentes del FDR han sido los primeros en exteriorizar, sin disimulo alguno, su temor por tales riesgos. Por encima de ese temor, empero, se ha impuesto la exigencia de aprovechar los espacios políticos abiertos por Esquipulas II para ir trabajando en favor de una solución dialogada al conflicto. Así lo formulaba Rubén Zamora el 21.11, a su arribo al aeropuerto de Comalapa: "Creemos que el retorno del secretario general del MNR, Ungo, y el mío, puede ser un elemento positivo que impulse el diálogo".

Las primeras reacciones del gobierno al retorno de los dirigentes del FDR han sido ambivalentes. Por un lado, tal hecho favorece el discurso de que las condiciones en el país ha cambiado y de que se está implementando un efectivo proceso de democratización. Consiguientemente, la reincorporación del FDR a la lucha política interna representaría implícitamente una deslegitimación del FMLN. Así lo interpretaba el 18.11 el vicepresidente Rodolfo Castillo Claramount, al considerar que con el retorno de Ungo y Zamora tanto la lucha armada del FMLN como el diálogo con éste "pierde sentido". En la misma línea, el 20.11, el Ministro de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, subrayó que el regreso del FDR constituía "un reconocimiento al proceso democratizador" y mostraba que "la situación ha cambiado y que todos los sectores pueden participar en la lucha política". Como corolario de ello, Rey Prendes concluía que "la lucha armada ya no tiene sentido en El Salvador". Por otro lado, sin embargo, el gobierno no ha abandonado del todo la predisposición a emitir amenazas infundadas contra la dirigencia del FDR. En esta

línea, el propio presidente Duarte manifestó el 22.11 que si Ungo y Zamora no rompían formalmente su alianza con el FMLN, podían ser acusados judicialmente por cualquier ciudadano salvadoreño como responsables de cualquier "sabotaje o crimen" cometido por la guerrilla.

La posición del FDR ante esta manipulación gubernamental de su retorno ha sido muy clara. De modo unánime, los dirigentes del FDR han subrayado que su regreso al país no implica que se dé ya un efectivo proceso de democratización, sino a lo más espacios políticos para que nuevas fuerzas puedan empezar a trabajar por ese proceso. Así lo formuló el Dr. Zamora el 21.11: "En El Salvador no hay una verdadera democracia. Venimos para aprovechar los espacios políticos y buscar una solución política a la guerra por medio del consenso de todas las fuerzas". Análogamente, el Dr. Ungo manifestó el 23.11 que "en la sociedad salvadoreña existen actualmente espacios políticos, pero no democráticos, además de que no hay condiciones para la participación del FDR en una contienda electoral, ya que no hay vida democrática en El Salvador". En tal sentido, la reincorporación del FDR a la lucha política interna no implicaría necesariamente su incorporación al proceso electoral próximo. Según Zamora, el objetivo fundamental de la Convergencia Democrática "no es participar en los próximos comicios, sino que éstos seán vistos en función de si acercan o alejan de la solución política del conflicto salvadoreño".

Consiguientemente, en contra de la manipulación propagandística gubernamental, el retorno del FDR no significa la ruptura de la alianza con el FMLN. Al respecto, Rubén Zamora ha subrayado que "nuestra presencia aquí no pone en discusión las alianzas políticas... hoy más que nunca, cuando se aprovechan los espacios políticos para crear una verdadera democracia y buscar una salida política a la guerra, no se puede romper la alianza con el FMLN, que es parte fundamental para solucionar la guerra". Contra lo que algunos sectores esperaban, el FMLN mismo ha apoyado la reincorporación del FDR a la lucha política. En un comunicado emitido el 22.11, los cinco integrantes de la Comandancia General han señalado que "la entrada de los líderes del FDR es resultado de espacios políticos abiertos por la lucha de nuestro pueblo y el respaldo de la comunidad internacional". Adicionalmente, como un gesto de respaldo a la decisión del FDR, el FMLN anunció el mismo día una tregua militar a nivel nacional hasta el 24.11, y una parcial, en San Salvador, hasta el 30.11.

AMENAZAS: El secretario general Partido Social Demócrata (PSD), Dr. Mario Reni Roldán, denunció el 23.11 que en horas de la mañana cuatro hombres armados lo buscaron en su residencia para matarlo, según lo expresaron ante una de sus hijas. El Dr. Roldán puntualizó que se trata de la tercera amenaza a muerte que recibe en menos de 12 días, pero que, afortunadamente, en ese momento se encontraba acompañando al Dr. Rubén Zamora a las instalaciones de Canal 12. Previamente, los desconocidos habrían llegado a la casa donde residía antes, en la colonia Escalón. Cuando preguntaron por él y los ocupantes de la casa les explicaron que el Dr. Roldán ya no vivía ahí, los desconocidos expresaron: "Bueno, entonces vamos a ir a la otra casa, porque tenemos que encontrarlo para matarlo". En relación a las anteriores amenazas, el Dr. Roldán informó que la primera de ellas la recibió el día en que sostendría una entrevista televisiva con el vicepresidente Castillo Claramount. En dicha ocasión, dos desconocidos penetraron a su clínica y le advirtieron que si no dejaba de hacer "lo que está haciendo", correría la misma suerte de Herbert Anaya. Posteriormente, el 19.11 recibió una nueva advertencia: "ya te dijimos que sos el siguiente y en la próxima no te vamos a avisar".

Más acciones guerrilleras

PREOCUPACION: Al referirse al retorno de los dirigentes del FDR, el presidente Duarte manifestó el 22.11 que la llegada de Ungo y Zamora "es uno de los dolores de cabeza más grandes que yo tengo. Mi preocupación más grande es que les pueda pasar algo, porque los mismos guerrilleros los pueden atentar. Para la guerrilla sería el máximo producto que les pueden sacar, así que yo tengo un temor inmenso de que los mismos guerrilleros los hayan mandado adentro para sacrificarlos y eso es muy triste y estoy muy preocupado".

UNTS: Dirigentes de la UNTS informaron que el 24.11 tenían programada una reunión con la Comisión de Diálogo Interno, a realizarse en el edificio de la Asamblea, pero a última hora del 23.11 recibieron una comunicación del Ministerio de Cultura, notificándoles que la reunión sería en Santa Tecla, presuntamente en la sede de dicha cartera. Ante dicha "informalidad", la UNTS decidió no concurrir a la reunión "porque se trata de algo serio y no estamos dispuestos a prestarnos a manipuleos del gobierno".

La intensificación del quehacer militar del FMLN, experimentado desde hace algunas semanas, no ha dado muestras de tender a su disminución. Las acciones guerrilleras de los últimos 15 días han reflejado, más bien, un sensible incremento del mismo. La semana recién pasada, el sabotaje contra el sistema de alumbrado eléctrico continuó causando graves problemas a la actividad industrial, comercial y bancaria del país. Según el Ministro de Economía, Ricardo Perdomo, el actual boicot al servicio eléctrico ha sido "la campaña más grave del sabotaje" en lo que va de la guerra. En este contexto, mientras voceros de la Compañía Eléctrica (CEL) anunciaban, el 18.11, que el servicio de energía se había reestablecido en un 100% en la zona metropolitana y en un 85% en el resto del país; fuentes civiles informaron del derribo de 2 postes en las cercanías de La Herradura, en La Paz; 2 torres en San Felipe, en San Vicente; 3 torres en Mercedes Umaña, Usulután; y otras torres y postes secundarios en Chinameca, San Miguel en el norte de San Salvador y en Chalatenango.

Por su parte, CEL dio a conocer, el 20.11, un informe sobre los daños causados por el sabotaje desarrollado entre el 5 y 19.11. Según CEL, la guerrilla "destruyó 13 torres de 12 líneas de transmisión primaria; 14 postes de 5 líneas de subtransmisión y causó daños considerables a postes y transformadores de la red de distribución de energía a nivel nacional". El comunicado agrega que "3 subestaciones primarias y 2 secundarias fueron objeto de fuego de artillería de los insurgentes" y que con las acciones de sabotaje, "los daños a las subestaciones y líneas de transmisión; el uso de combustible y el impacto al país por la falta de energía elevan las pérdidas a 72.6 millones de colones".

Asimismo, fuerzas rebeldes sabotearon el 18.11 una oficina del Banco de Fomento Agropecuario, en Jucupa, Usulután; incendiaron un camión de la Industria Avícola Salvadoreña, en la carretera de Santa Tecla a Santa Ana, y el 20.11 dinamitaron un tren de la compañía ferroviaria FENADESAL.

Por otra parte tras el ataque al puente el Delirio (Proceso 312), donde se causaron 9 soldados muertos y un número indeterminado de heridos, se ha registrado una considerable cantidad de combates en distintos pun-

tos del país. Entre el 17 y 23.11, se reportaron acciones en por lo menos 21 poblaciones de 8 departamentos de las zonas oriental, paracentral, central y norte del país. Entre ellas, destacan el ataque del 17.11 al puesto militar del puente Negro, en Tecoluca, San Vicente; en el que resultó un soldado muerto y 7 heridos; el mismo día, el ataque a la base militar en el cerro Las Delicias de San Esteban Cartarina y a la casa cuartel de esta población, también en San Vicente. Los rebeldes habrían utilizado morteros y lanzagranadas así como francotiradores para realizar el ataque y, a diferencia de otras operaciones, el ataque fue repetido el 18.11 con la misma intensidad. Por su parte, la Fuerza Armada, para contrarrestar el asedio, lanzó una contraofensiva utilizando intenso fuego de aviones y helicópteros artillados. Sin embargo, no se proporcionó reporte alguno sobre las bajas resultantes.

A su vez, voceros de la Tercera Brigada de Infantería afirmaron el 18.11 que como consecuencia del accionar rebelde "la Fuerza Armada ha intensificado hoy la movilización de sus fuerzas a las zonas conflictivas del oriente" rompiendo así, antes de lo establecido, el cese de fuego unilateral. Más tarde, el 20.11, COPREFA anunció oficialmente que "el cese de fuego decretado el 5.11 vence hoy... concluido el plazo la FA reinicia todas las operaciones militares dentro de la operación Concordia".

En términos generales, el levantamiento de la medida no tiene la mayor trascendencia. Dados los términos en que fue planteada y operativizada, ésta no llegó a ser siquiera medianamente efectiva; todo lo contrario, el accionar bélico se vio sensiblemente incrementado. El repliegue de fuerzas, argumentado por lo mandos militares como mecanismo de la FA para viabilizar el cese de fuego, no parece haber sido tal. El mismo día que se decretó la medida, fuerzas del ejército fueron enviadas a ocupar posiciones en áreas donde no ejercen control permanente, con lo cual la FA se obligó a sí misma a montar operativos en torno a tales lugares para garantizar la seguridad de las posiciones tomadas. Estos movimientos y desplazamientos castrenses distan mucho de poder ser considerados un repliegue de fuerzas; cabría denominárseles más bien, un forzado repliegue de posiciones.

DETENCION: Voceros del servicio migratorio norteamericano informaron el 24.11 que el ex-capitán del ejército salvadoreño, Alvaro Rafael Saravia Merino, había sido detenido en Miami como sospechoso de complicidad en el asesinato de Mons. Romero, ocurrido en marzo de 1980. Según las fuentes, la detención se habría efectuado a solicitud de las autoridades de Migración de Estados Unidos, en razón de que Saravia Merino habría conculcado las leyes de inmigración locales.

BALANCE: En el marco de la intensificación de las acciones militares, experimentada la semana recién pasada, Radio Venceremos dio a conocer un balance de las actividades guerrilleras. Según la radio, las fuerzas guerrilleras causaron al ejército un total de 239 bajas entre muertos y heridos, en combates registrados entre el 15 y 22.11, en distintos puntos del país. Por su parte, COPREFA reconoció que el ejército sufrió 46 bajas en ese tiempo y aseguró que la FA ocasionó otras 22 a los rebeldes. Añadió la fuente castrense que tropas del ejército desbarataron una célula guerrillera que funcionaba en la ciudad de Santa Tecla, en La Libertad, capturando a 14 de sus integrantes.

Agudización del desempleo

REVELACIONES: En conferencia de prensa ofrecida el 23.11 en la base militar de Ilopango, el presidente Duarte anunció que, como resultado de las declaraciones de un nuevo testigo detectado recientemente, en el asesinato de Mons. Romero estaría implicado el Capitán Alvaro Saravia y el Mayor Roberto D'Aubuisson. El testigo, de nombre Amado Antonio Garay, habría sido el chofer del vehículo a bordo del cual se condujo el asesino de Mons. Romero. Garay fue localizado en Estados Unidos por la unidad ejecutiva de la comisión que investigaba el caso, y persuadido, a solicitud de la Fiscalía General, a declarar sobre el crimen. Según Garay, que en aquel momento se desempeñaba como chofer del capitán Saravia, éste le habría ordenado que llevara al asesino —a quien describe como alto, delgado, de barba negra, como de unos 25 años— hasta el Hospital de la Divina Providencia, donde Monseñor oficiaba misa. Posteriormente, una vez cometido el magnicidio, el capitán Saravia habría reportado el hecho al Mayor D'Aubuisson, indicándole: "Ya hicimos lo que habían planteado, matar a Monseñor Romero". Como D'Aubuisson le objetara que no lo hubieran hecho todavía porque no era el momento más adecuado, Saravia le habría respondido: "Como usted dio la orden, lo hicimos".

En medio de una especial agitación política nacional en torno al cumplimiento o no cumplimiento de Esquipulas II, y a la llegada al país de los líderes socialdemócratas Rubén Zamora y Guillermo Ungo, la Asamblea Legislativa aprobó el 19.11, con 57 votos, el pago de \$500.00 de aguinaldo para los empleados públicos y municipales de todo el país, según se ha hecho en al menos los últimos 7 años. La solicitud original de tal decreto legislativo fue presentada semanas atrás por AGEMHA. Sin embargo, en el momento no hubo respuesta de la Comisión legislativa correspondiente; hasta que el 17.11 el Vice-ministro de Hacienda, a iniciativa del Ejecutivo, presentó a la Comisión de Presupuesto la propuesta del decreto aprobado dos días después.

La aprobación de aguinaldo para los empleados públicos, que funcionarios gubernamentales han calificado "como un esfuerzo más del gobierno por favorecer a los trabajadores", contrasta con el cierre de dos fábricas más: "Brassieres Gloria", en paro de labores desde el 28.05, que indemnizó a 135 trabajadores el 17.11; y "Etiquetas y Elasticos" en paro de labores desde el 11.05, y que, luego de negociaciones obrero-patronales mediadas por el Ministerio de Trabajo, acordó pago de indemnización a los trabajadores hasta la fecha de inicio de la huelga y el cierre definitivo de la empresa el 13.10, según lo informara el 18.11 el Ministro de Trabajo, quien atribuyó tales cierres a los movimientos sindicales en cada una de las empresas; al tiempo que expresó la preocupación del gobierno central "por la escalada de violencia laboral" frente a la que exhortó a las organizaciones laborales a que "enmarquen sus acciones en un marco estrictamente laboral, así como dentro de la legalidad, sólo de esta manera el Ministerio podrá responder por sus acciones, de lo contrario se exponen a la ejecución de actividades violentas, y a recibir las sanciones que impone el Código de Trabajo".

Sin embargo, aunque las organizaciones laborales reconocen como válida la función que el Ministro de Trabajo ha señalado para ellas, la diferencia de concepciones es profunda: el proceso de pacificación querido por el movimiento laboral no es el proceso de

pacificación que busca el gobierno y, consecuentemente, los métodos de cada uno para construirlo son también distintos.

En orden a señalar el grave estado actual de las mayorías en el país, y la urgencia de cambios en ello, el 20.11 el Comité de Despedidos y Desempleados (CO-DYDES) ha vuelto a señalar que "8.600 empleados ha despedido la democracia cristiana en los 3 años 4 meses de gobierno". Como testimonio, Gilberto Beltrán, dirigente de esa organización, trajo a cuenta el despido de 200 trabajadores en la Refinería de Azúcar hace casi 3 años, de 337 empleados en ANDA, 76 en el ISTU y los más de 100 trabajadores del MAG que a partir de diciembre quedarán cesantes por la finalización de su contrato de trabajo y la imposibilidad del Ministerio de incorporarles a la Ley de Salarios. La UNTS, en su comunicado del 16.11, informa también que "en los 90 días (de Esquipulas II), Duarte ha condenado a morir de hambre por despido a: a) 66 trabajadores del ISSS, argumentando participar en huelga; b) 100 trabajadores de ANDA, sin argumento; c) 184 trabajadores del IVU". Vista esta situación desde las condiciones económicas reales de los empleados, cuyo salario promedio en la ciudad es de ₡450.00; y en el campo, según la tabla de salarios vigentes para la presente temporada de recolección de café, algodón y caña de azúcar, el salario promedio mensual sería de ₡362.50; si a esto se añade que, según el comunicado de la UNTS de fecha 23.11, "el mismo gobierno ha tenido que reconocer a través de MIPLAN que el costo de vida para una familia promedio en la ciudad es de ₡2.667.64 mensual y en el campo es de ₡1.673.25 mensual", y que el 32% (48% según UNTS) de desempleo abierto va en aumento, el resultado es alarmante. Si bien las demandas presentadas por la UNTS en su comunicado del 23.11 no son viables y carecen de una considerable dosis de realismo, la realidad actual impone la exigencia de emprender serios esfuerzos por la pacificación del país a fin de terminar, con paso seguro, con el deterioro de la economía y empezar a recoger posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las mayorías populares. Antes, por más exigencias y agitación política que se haga, ningún avance y menos una solución serán viables.

DESMENTIDO: Al responder a las declaraciones del presidente Duarte sobre su presunto involucramiento en el asesinato de Mons. Romero, el Mayo Roberto D'Aubuisson manifestó el 23.11 que las acusaciones de que estaba siendo objeto eran una "cortina de humo" tendida por el gobierno para "apartar la atención del pueblo de los serios problemas que afronta el país y al interior del PDC, sobre todo con la llegada de Ungo y Zamora". D'Aubuisson aseguró que el Sr. Amado Garay, quien habría conducido el vehículo del asesino de Monseñor, por instrucciones de su patrón, el capitán Alvaro Saravia, era como el sexto "testigo" que el PDC presentaba para involucrarlo en el caso. El Mayor agregó que en ocasiones pasadas, sus asesores jurídicos no habían estimado necesario acudir a una defensa formal frente a las acusaciones, pero "ahora sí creo que va a ser necesario reunirme con asesoría jurídica para ver si presentamos pruebas a mi favor al respectivo juzgado donde se está llevando la acusación". Posteriormente, en declaraciones rendidas el 24.11, el Mayor ha señalado que "los responsables directos de la muerte de Mons. Romero fueron los cuerpos de seguridad, específicamente la Policía Nacional donde fungía como director el Cnel. Reynaldo López Nuila"; e indicó que presentaría pruebas de ello.

Oscuro panorama agrícola

VISITANTE: A su arribo al país, el 23.11, el presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, declaró que "venimos a El Salvador sabiendo que hay dificultades y problemas, sabiendo que hay obstáculos, sabiendo que hay eclipses. Pero hoy existe Esquipulas II, y debemos persistir en lograr su triunfo". "Nosotros —añadió— siempre entendimos que tenía que haber una solución que partiera de los propios centroamericanos. Nosotros siempre luchamos por crear un viento que ayudara a los centroamericanos a resolver sus problemas, a que los centroamericanos encontraran su camino. No habrá paz que venga de afuera, no habrá solución que les sea impuesta; tendrá que emanar del propio pueblo". El 24.11, el mandatario visitante se presentó ante la Asamblea Legislativa, donde reiteró que "la solución al problema de Centroamérica surgirá de Centroamérica, con la peculiaridad propia de cada pueblo, aun cuando los principios sean los mismos... Es así como debemos compartir esfuerzos por la democracia, y es así como también debemos exigir a las grandes democracias no que nos regalen recetas prefabricadas, porque basta ver el panorama mundial para saber que nadie tiene la receta milagrosa por medio de la cual todos los problemas se resuelven, sino que la solución sale de nosotros mismos".

A pocos días del inicio "oficial" de la recolección de las cosechas de los principales productos de exportación, las gremiales empresariales vinculadas a estas actividades han manifestado su pesimismo en torno a la posibilidades de la cosecha 87/88 de lograr una mejora significativa en el nivel de exportaciones y/o en el abastecimiento adecuado por la industria y agroindustria nacional. Las principales causas de estos resultados argumentadas por las gremiales las constituyen en su orden: la carencia de estímulos e incentivos de parte de la política económica, los efectos de sequía y del sabotaje económico, y las plagas que afectan los cultivos.

Según un informe presentado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por el Comité de Fomento de Cultivo de Algodón, las pérdidas totales en dicho cultivo ocasionadas por la sequía ascienden a \$31,790,999, que se desglosan en \$26,709,379 por pérdidas de algodón en rama, jornales de recolección no pagados, transporte y otros, y en \$4,370,625 que corresponden a los 97,125 qq de semilla de algodón que dejarán de producirse. Ante esta situación, los miembros de dicho Comité han pedido al gobierno "comprensión y justicia" para evitar "la quiebra, el embargo, la incomprensión y la miseria". Según los algodoneros una medida apropiada al respecto sería la elevación del precio de garantía al productor, de \$109 a \$127 por quintal rama.

Por su parte, la Asociación de Productores de Caña (PROCAÑA) ha advertido que la producción de la zafra 87/88 será de sólo 2.8 millones de toneladas, lo que significa una reducción de 0.6 millones con respecto a la zafra 84/85. PROCAÑA responsabiliza de esta drástica reducción a "la falta de incentivos a los cultivadores de caña". Asimismo, los cañicultores han acusado a la guerrilla de haber quemado hasta el 16.11, 30 manzanas de cañaverales, lo que representa una pérdida de \$1.5 millones para la presente zafra. La reducción de la producción será tan grande que, de acuerdo a cifras del MAG, PROCAÑA sostiene que en 1988 "encasamente se cubrirá el consumo interno de azúcar, que es de 3.4 millones de quintales, y no habrá materia prima para que trabajen las 3 plantas de alcohol que funcionan en el país". Como principal paliativo a esta crisis, PROCAÑA demanda "la fijación de un nuevo precio de garantía

(superior al de ¢65.00 por toneladas que se encuentra vigente), el cual debe estar conforme a la realidad económica del país y especialmente al nivel de inflación.

En cuanto a la producción cafetalera, las informaciones disponibles por las gremiales cafetaleras no proporcionan un dato exacto sobre la posible reducción del producto; sin embargo, la Unión de Cooperativas de Cafetaleros de El Salvador (UCAFE) informó el 15.11 que ha constatado que, debido a la sequía, el café no ha alcanzado su peso normal, ya que "un saco que normalmente pesa de 165 a 170 libras, ahora pesa sólo 145 libras, con lo cual se dañará al productor pues este menor peso va a redundar en un menor precio en el beneficio ". Frente a esto, tanto UCAFE como la Asociación Cafetalera (ASCAFE) han reiterado su ya conocida postura ante la crisis cafetalera: la necesidad y urgencia de revisar la política cafetalera del gobierno, lo cual incluiría, por supuesto, una revisión de la política de fijación del precio interno al productor, así como de los sistemas de comercialización externa del grano.

Finalmente, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), recogiendo y expresando los intereses del sector agroexportador en su conjunto, ha lanzado un patético llamado al gobierno para que destine "todos los recursos del aparato estatal para hacer frente a la calamitosa situación que amenaza al pueblo por la drástica reducción de los principales cultivos, incluyendo a los granos básicos". Este llamamiento incluiría de parte del gobierno "una seria reflexión sobre los efectos de nuevas políticas salariales, pues debe tener presente la caótica realidad que vive el sector productivo y en particular el agropecuario".

Como tradicionalmente suele acontecer en este país, durante los meses de recolección de cosechas tienden a acentuarse las demandas tanto de los agroexportadores como de los trabajadores agrícolas (Proceso 312), aunque por supuesto entre ambas median abismales diferencias ya que lo que para algunos es un problema de rentabilidad del capital para la otra parte mayoritaria es un problema de reproducción material de sus vidas.

IRAN-CONTRAS: El presidente Reagan es a la larga el responsable del escándalo Irán-contras, que causó la más grave crisis de su gobierno, debido a que permitió a una "cábala de fanáticos" controlar la política exterior del país y burlarse de la constitución y de las leyes, dijo en su informe final, dado a conocer en Washington el 18.11, una comisión del Congreso norteamericano que investigó el caso. Este informe sostiene que "aunque no hay pruebas de que hiciera nada ilegal o inconstitucional, el presidente Reagan debía saber lo que pasaba en la Casa Blanca". El informe estima que el presidente "ha fallado en su deber constitucional de vigilar el cumplimiento de la ley", y resalta que dio "información equivocada" al público norteamericano y no condenó a funcionarios de su administración que destruyeron documentos y, presuntamente, violaron las leyes. "El presidente —dice el informe— creó, o al menos toleró, un ambiente en el que las personas que sabían del desvío de fondos de la venta de armas a Irán a los Contras pensaron, ciertamente, que ejecutaban la política del presidente". Según el informe, "los ingredientes más determinantes de la política seguida con Irán y con los Contras eran el secreto, el engaño y el desprecio a la ley".

Propuesta sandinista para los contras

La hábil y flexible política exterior del gobierno nicaragüense ha sido uno de los factores determinantes para que el proceso de paz impulsado por los acuerdos de Esquipulas II, a pesar de su innegable fragilidad, continúe presentándose como una opción viable para propiciar una solución negociada al profundo y complejo conflicto centroamericano.

Ciertamente, el balance del proceso de paz durante sus primeros noventa días ofrece un "cuadro regional con aspectos positivos, pero no suficientes para alcanzar la paz". En este balance, el gobierno nicaragüense, frente a las 4 restantes naciones centroamericanas, destaca de manera especial por las medidas adoptadas para cumplir con los compromisos adquiridos. De hecho, el anuncio del presidente Ortega de negociar un cese de fuego con los líderes de la contra, a través de un intermediario, ha sido una importante concesión pragmática que posibilita mayor dinamismo y respaldo internacional a los esfuerzos para generar la distensión en el área.

Esta apreciación se desprende de las reacciones que desencadenó, entre los distintos sectores que intervienen en el drama centroamericano, la anunciada disposición nicaragüense. Incluso dentro de los líderes de la contra, tal disposición se recibió inicialmente con cierto optimismo. En este sentido, Alfonso Robelo declaró que las negociaciones indirectas para concertar un cese al fuego son "el punto medular de las demandas de la Resistencia Nicaragüense. No cabe duda de que nos apuntamos una victoria". Por su parte, Alfredo César expresó que "el nombramiento del Cardenal Obando como mediador elimina todos los obstáculos para llevar a cabo lo que por años ha parecido imposible". Sin embargo, casi inmediatamente, los líderes de la contra adoptaron una ambigua postura

que evidenció su desconcierto y rechazo hacia la propuesta del gobierno nicaragüense.

A simple vista, con la concesión del diálogo indirecto, parecía que los contras habían ganado una vieja batalla que desde 1984 había librado en su nombre la Admón. Reagan. No obstante, en el marco de los acuerdos de Esquipulas II, los alcances de un diálogo entre representantes del gobierno nicaragüense y líderes contrarrevolucionarios adquiriría unas dimensiones radicalmente distintas a las exigidas y deseadas por la administración norteamericana. Justamente, por ello, el presidente costarricense, Oscar Arias, había insistido en la necesidad de tales negociaciones, al afirmar que "las gestiones para poner en vigencia los acuerdos enfrentan un callejón sin salida a menos que accedan los sandinistas a negociar un alto al fuego" con las fuerzas contrarrevolucionarias.

Al respecto, no cabe duda de que el impacto producido por esta acción política del gobierno nicaragüense constituye un impulso que desenpantana y consolida el proceso de pacificación del área centroamericana. Al menos, el gesto obliga a la Admón. Reagan a replegar sus beligerantes posiciones respecto de los esfuerzos de paz en la región. Esto se ha manifestado de forma particular en una relativa mayor participación de miembros del Congreso norteamericano en actividades que impulsan y benefician los esfuerzos de Esquipulas II. En concreto, el 13.11, el congresista demócrata, Jim Wright, propició en la sede de la Nunciatura Apostólica en Washington el inicio de conversaciones entre el presidente Daniel Ortega y el Cardenal Miguel Obando, en calidad de intermediario, para emprender el proceso que tendería a concertar el cese al fuego en Nicaragua (Proceso 312).

Esta gestión provocó, al interior de la Admón. Reagan, un generalizado malestar, que se tradujo en duras críticas para Wright por "ser un intruso" al involucrarse en actividades propias del Departamento de Estado. Marlin Fitzwater, vocero presidencial, comentó al respecto: "no sabemos qué se trae (Jim Wright). Ciertamente, esas conversaciones... podrían muy bien no haber sido en el mejor interés del proceso de paz". Jim Wright, no obstante, defendió el papel que desempeñó durante el encuentro de Ortega y Obando. El 17.11 acudió a la Casa Blanca y se reunió con el presidente Reagan, el vicepresidente Bush y el Secretario de Estado, Shultz. En el encuentro "hubo un intercambio de enérgicas recriminaciones y acusaciones". Con todo, luego de dicha reunión, Wright manifestó: "no intento ser crítico de la Administración. Espero que todos estemos en el mismo equipo. Quiero pensar que el Presidente y el Secretario de Estado quieren la paz en Centroamérica como yo". No obstante, añadió: "Ellos intentan que el proceso fracase y usar esto como justificación para pedir más ayuda militar para los contras".

A diferencia de la Admón. Reagan, los más importantes representantes de la comunidad internacional interesados en propiciar la pacificación en Centroamérica han elogiado la disposición nicaragüense para concertar el cese al fuego. Así, el presidente Arias manifestó el 16.11 que "la propuesta del presidente Ortega está lejos de ser aceptada, pero es para ser negociada, y no una iniciativa para ser tomada o rechazada, y esto es lo más importante". En cambio, los líderes contrarrevolucionarios rechazaron totalmente la propuesta de 11 puntos que el Cardenal Obando las entregara el 14.11 en Miami. En un comunicado oficial fechado el 16.11 en San José, el directorio de la Contra manifestó que "la

propuesta del gobierno sandinista soslaya los más elementales y universales principios establecidos para negociaciones de ese tipo, al plantear a la Resistencia escoger entre la rendición y la relocalización en otros países". Asimismo, según los contras, "el régimen sandinista violenta el principio de simultaneidad establecido en el artículo XI del convenio de Esquipulas II, al proponer la liquidación de la Resistencia como medida anticipada al cumplimiento de los compromisos relacionados con amnistía, derogación del estado de emergencia y democratización". Entretanto, el Cardenal Obando ha condicionado su misión de intermediario a que "se nos permita hacer sugerencias tanto al gobierno sandinista como a la RN porque no quiero ser como una pelota de fútbol".

El 19.11, el presidente Ortega cumplió con el requisito del Cardenal al entregarle un documento del gobierno nombrándolo oficialmente como intermediario "con facultades para hacer sugerencias y dar consejos a las partes". A su vez, Bosco Matamoros, portavoz político-militar de los contras, anunció el 23.11 que Azucena Ferrey y Alfonso Robelo viajarían el 24.11 a Managua para "entregar en mano" al Cardenal su contrapropuesta de alto el fuego y la carta donde lo aceptan como mediador en las negociaciones. A este anuncio el gobierno nicaragüense ha respondido condicionando el ingreso de los líderes contras a su acatamiento de la ley de amnistía.

No es del todo predecible el dinamismo que este proceso de negociación puede adquirir. Sin embargo, a resultas de ello, el apoyo norteamericano a los contras parece una carta cada vez menos atractiva para la Admón. Reagan, aunque persista en aferrarse a ella. En cualquier caso, los dinamismos de Esquipulas II tendrán la última palabra sobre la efectividad de dicha carta.

Pronunciamiento de la Convergencia Democrática (I)

Como apoyo documental al análisis del significado que para el proceso político salvadoreño tiene la integración de la "Convergencia Democrática" constituida recientemente por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) y el Partido Social Demócrata (PSD), reproducimos el comunicado emitido por la Convergencia en torno a los que estima son los problemas fundamentales del país y a su postura frente a ellos.

Si en algo coincidimos todos los salvadoreños, es en que nuestra Sociedad está en crisis, la más profunda crisis de su historia, a tal grado que nuestro presente y futuro como sociedad y nación, están en inminente peligro, ante la negligencia del actual gobierno, que persiste en hundirnos económica, social y políticamente.

Siete años de guerra, dos millones de refugiados y desplazados, tres mil millones de dólares para el sostenimiento de la economía y el mantenimiento de la guerra, sesenta y cinco por ciento de desempleo, más de sesenta mil muertos, son estos los datos que por sí solos nos hablan de la dramática situación que vivimos.

Estamos conscientes de que esta crisis afecta a toda la nación; pero son los sectores pobres de nuestro pueblo los que más sufren sus efectos, de los que no escapa tampoco la clase media, aunque ésta se resista a aceptar tan triste realidad; sin embargo, estamos seguros de que es en la totalidad del pueblo donde está la clave fundamental para superar la crisis. Es por ello que nuestros partidos MNR, PSD y MPSC, han iniciado un proceso de reflexión política y de acción concertada, para abrir un nuevo camino de participación hacia una solución nacional, popular, democrática y pluralista.

I. Cuatro problemas fundamentales:

El análisis que compartimos sobre la

situación nacional, nos lleva a la conclusión de que en la base de todos nuestros sufrimientos y angustias, existen cuatro problemas fundamentales:

1. Un modelo económico-social injusto:

Los modelos socio-económicos implementados y defendidos por parte de los gobiernos y sectores de poder, siempre han tenido y tienen como objetivo central el favorecer los intereses de las minorías, discriminando a la inmensa mayoría popular.

El Gobierno y la oligarquía han manejado el país como si fuera su finca de café; se han preocupado del crecimiento económico únicamente para acumular enormes riquezas e invertirlas en el exterior, mientras la gran mayoría de los salvadoreños no han tenido ni siquiera lo básico para subsistir; de tal suerte que la extrema pobreza se manifiesta desde nuestros orígenes en todos los ámbitos con desempleo, salarios de hambre, desnutrición, falta de vivienda, insalubridad, analfabetismo, etc.

Luego de explotar esta situación socio-económica, la receta que se nos ha aplicado en los últimos siete años, no ha hecho sino empeorar la situación de desigualdad, porque de lo que se trata es de preservar el dominio estratégico de una potencia externa; los resultados están a la vista: el intento de reforma agraria ha dejado campesinos y cooperativas desfinanciados, cargados de deudas, sin insumos y frustrados; la nacionalización del Comercio

Exterior es un engaño, hoy se les debe más dinero a los pequeños y medianos agricultores y nadie sabe adónde van a parar las ganancias; se han recibido cerca de tres mil millones de dólares en concepto de "Ayuda" Externa, y hoy el desempleo es peor que antes, la inversión productiva está paralizada y el Gobierno se ha empantanado en la más abierta y descarada corrupción.

2. Un modelo político antidemocrático

La política nacional está dominada por un principio fundamental: en El Salvador no es el pueblo el que decide, sino las minorías y los intereses extranjeros; primero fue el binomio oligarquía-ejército el que expropió el derecho del pueblo a decidir su destino, en los últimos ha sido Washington en forma creciente el que se ha apoderado de nuestra capacidad de decidir.

El gobierno demócrata cristiano se inserta en un proyecto contra-insurgente que responde a los intereses de la administración Reagan y que, bajo la apariencia de formas democráticas, busca neutralizar la acción política de las fuerzas opositoras y populares, para las cuales no existen mecanismos suficientes de participación en la toma de decisiones políticas, puesto que no bastan las elecciones para garantizar la democracia, sino por el contrario, es la democracia la que legitima las elecciones para una efectiva participación.

Por ello es que en nuestro país se excluye por la vía del terror y de la amenaza a grandes sectores de la sociedad, y por ello es que, a pesar de cuatro rondas electorales en los últimos seis años, los problemas no se resuelven, los escuadrones de la muerte están presentes y actuando, la organización sindical es constantemente amenazada, entre otros aspectos de sobra conocidos.

3. Un estado de guerra:

Como producto de una estructura social excluyente y antidemocrática, se gestó el desarrollo de un proceso de radicalización popular, que dio lugar a la aparición de formas violentas de lucha, dinámica que ha desembocado en el enfrentamiento militar que hoy vivimos y que se ha constituido en el eje en torno al cual giran las distintas manifestaciones de la crisis nacional, generando mayores dimensiones de polarización, destrucción y muerte nunca vistas en la historia del país.

La implementación de la estrategia de contra-insurgencia reaganiana ha venido a representar un factor a partir del cual todas las formas de injusticia social y política han cobrado dimensiones particularmente graves; es decir, la guerra civil no sólo es la expresión de problemas sociales y políticos no resueltos, sino que ahora ha pasado a constituirse en una activación de viejos y nuevos problemas que afectan aún más al conjunto de la sociedad salvadoreña.

4. Pérdida de nuestra soberanía:

A partir de 1980, el Gobierno se constituyó en el responsable de un deterioro cualitativo de la Soberanía Nacional, a tal grado que la creciente intervención del gobierno norteamericano se ha venido manifestando en todos los ámbitos de la sociedad, como lo demuestra la presencia constante de sus asesores militares y civiles en todas las dependencias del Gobierno, el financiamiento de la guerra, las subvenciones al presupuesto nacional, el uso del territorio nacional para realizar actividades encubiertas en contra de países hermanos. Al convertirnos en el país de América Latina que recibe el mayor monto de ayuda norteamericana, la que sobrepasa incluso el

presupuesto nacional, el Gobierno ha enajenado nuestra soberanía.

Ahora, las decisiones fundamentales de nuestra política se hacen en Washington por Washington y para los intereses de Washington, argumentando falsamente que nuestra crisis actual es resultado de una confrontación Este-Oeste, señalando reiteradamente que el movimiento popular se debe a la intervención de países comunistas y negando que la crisis tiene su

origen en la propia historia de El Salvador. Las soluciones que el gobierno de los Estados Unidos pretende imponer, dejando de lado los intereses de los salvadoreños, apuntan a defender sus intereses geopolíticos de la manera más descarada y prepotente.

El ignominioso acto de José Napoleón Duarte al besar la bandera norteamericana, es significado del grado de sumisión de este gobierno a los intereses norteamericanos.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢ 45.00
correo	¢ 55.00
Centroamérica	\$ 20.00
Norte y Sur América	\$ 30.00
Europa	\$ 35.00
Otras regiones	\$ 35.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a: Centro de Distribución UCA, Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador C.A. Tel. 240011, Ext. 191.